

# Reformas ¿para quién?

José Virtuoso

**La reforma del Estado y del sistema político en general ha sido un deseo permanente de la democracia venezolana. A partir de 1958, en cada período presidencial se ha creado alguna comisión institucional para acometer el estudio y programación de esta tarea. El 17 de diciembre de 1984, el presidente Jaime Lusinchi, siguiendo la tradición de sus antepasados, creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). De los trabajos de esta comisión se conocen ampliamente dos documentos muy importantes: las propuestas de reformas políticas inmediatas y los lineamientos generales de una nueva estrategia económica.**

## EL ESTAMPIDO DE LAS REFORMAS

A diferencia de lo que ha ocurrido en nuestro pasado democrático, hoy el problema de las reformas no se ha quedado encerrado en el ámbito de comisiones, que mueren para ser sustituidas por otras, sino que el tema ha tomado la calle y se ha convertido en un verdadero debate público. En efecto, la discusión sobre las reformas pronto trascendió el espacio de la COPRE y de la élite política, y abarcó todos los sectores de la vida nacional. Las universidades, los gremios, las organizaciones empresariales, los sindicatos, las organizaciones vecinales, los medios de comunicación, etc., se convirtieron en foro para el debate de opiniones en torno a la necesidad de reformas de la organización política, económica y social venezolana. De debate público, se convirtió en debate electoral y en propaganda del gobierno. Todos los políticos quisieron hacerse protagonistas del movimiento reformador. El paso siguiente ha sido la discusión legislativa y los movimientos de presión por la aprobación de tal o cual reforma.

Esta discusión nacional no se ha quedado en medio de la "sapiencia" de los ilustrados del país sino que está bajando hasta el hombre común y corriente. Prueba de ello es el trabajo del Consejo Supremo Electoral acerca de la percepción de la población sobre el tema de las reformas. En este trabajo, más del 50% de la muestra encuestada mostraban grandes expectativas sobre este movimiento de opinión pública, aunque sólo el 17% conocía el contenido explícito de las reformas (1). También es importante traer a la memoria la entrega al Congreso Nacional de 14.000 firmas recogidas en Caracas pidiendo la reforma de la ley orgánica municipal, movimiento que protagonizó FA-CUR en 1987.

La generalización del discurso de las reformas en la colectividad venezolana ha funcionado como un condensador de juicios, sentimientos, opiniones, propuestas y movimientos de cambio social dispersos a lo largo y ancho del país. Bajo la palabra reforma se escondió la frustración de la ineficiencia e ineficacia del Estado Venezolano, el descontento contra la corrupción, la ilegitimidad del discurso de los po-

líticos, el escepticismo electoral, etc. Junto con ello la palabra reforma también expresa la necesidad de cambio y una gama muy extensa y variada de medios para su realización efectiva. De manera que el tema de "las reformas" se ha convertido en lenguaje común y generalizado de una gran mayoría de venezolanos que manifiesta un espíritu colectivo de descontento y propuesta social. El caldo de cultivo de este proceso es la crisis de los fundamentos del sistema político que ha supuesto el deterioro de los procesos de legitimación del mismo, el debilitamiento de las instituciones fundamentales como el Estado y la emergencia de nuevas fuerzas sociales paralelamente al aniquilamiento de otras.

El fenómeno de las reformas así entendido se comporta entonces como la ideología nacional del momento en el sentido que Guy Rocher da al término: "un sistema de ideas y de juicios, sentimientos y valores, que sirve para describir, explicar, interpretar o justificar la situación de un grupo o de una colectividad" (2). Se trata de una racionalidad explicativa, que bajo ciertos contenidos temáticos expresa la visión y la situación de una colectividad determinada.

Sin embargo, se nos despierta la sospecha y la duda. ¿Qué hay detrás de todo el discurso reformador? ¿Qué intereses están en circulación? ¿Qué lucha de poderes está en juego? Estos cuestionamientos pueden sonar a capciosos y especulativos. Al respecto es útil recordar cómo detrás de muchos movimientos de cambio y reformas institucionales en la historia constitucional venezolana se escondían los intereses de distintos sectores sociales y su correlativa lucha de poder.

Así el movimiento independentista y republicano, del que la constitución de 1811 es la primera expresión ideológica completa, conmocionó y convocó a toda la sociedad colonial. Bajo la capa de independencia, libertad e igualdad se escondía una compleja red de intereses de oligarquías regionales, las aspiraciones y frustraciones de las clases populares, el descontento del clero católico, etc. En 1830, bajo la bandera de la república soberana e independiente, se estructuró un movimiento nacionalista y separatista

que pretendía unificar esfuerzos en torno a la construcción de la patria recién nacida. De todos es sabido cómo en el fondo de esa bulla se escondían los intereses de los caudillos militares venezolanos por constituirse en los herederos directos de la aristocracia criolla.

La guerra federal y la constitución de 1864 son los dos hitos más importantes del gran movimiento nacional que estremece a Venezuela desde 1859 hasta 1876. La mayor parte del territorio venezolano vibró con el lema de acabar con el centralismo del poder, igualdad, ¡viva el federalismo! ¿detrás que había? Los intereses de los jefes liberales, el poder de los caudillos locales y las aspiraciones de igualdad social de miles de llaneros que hicieron suyo el emblema federal, bautizándolo como "federal" y rellenándolo de su propio contenido.

Para no cansar con el recorrido, podemos hacer una última referencia al movimiento político por la democracia que cristaliza en las constituciones de 1947 y 1961. Es quizás aquí donde en forma más variada y conflictiva concurren una infinidad de sectores sociales proclamando todos la misma ideología: sectores de la institución castrense, partidos políticos, la burguesía nacional, movimiento obrero, la clase media, etc. Todos proclamaban la bondad de la democracia pero para cada grupo tenía su significado muy específico (3).

Desde esta perspectiva tenemos derecho a preguntarnos por el movimiento social de fondo que se manifiesta en la ideología de las reformas y del cual ésta no es más que un epifenómeno, una gran sábana, que cubre una constelación amplísima de intereses y lucha de poderes.

Quisiera profundizar en esta reflexión las causas del surgimiento y consolidación de la ideología de las reformas, caracterizar a los actores sociales que se mueven en ella y señalar cómo éstos aprovechan en su lucha por el poder tal discurso.

## DEMOCRACIA SIN PUEBLO

El primer actor que queremos analizar es la dirigencia máxima de AD y COPEI. Ellos son más que conscientes de la crisis del sistema, en el sentido de que éste no puede seguir funcionando como hasta ahora y de que es necesaria una redefinición del mismo y de su respectiva posición en él. Para emprender el camino de ese cambio de rumbo, este actor ha tomado como estrategia reducirse a su propia discusión en conciliábulos cerrados, sin es-

cuchar las voces del conjunto social. Prueba de ello son las polémicas entre el CEN de AD y la COPRE cuando ésta presentó al país sus proposiciones de reformas políticas: ¡aquí quienes decidimos lo que hay que hacer somos nosotros!, decía el cogollo partidista. También se puede hacer referencia al intento de reforma en pro de una mayor democratización del partido en la última CONVENCION NACIONAL de COPEI, que fue torpedeado por la misma dirigencia.

Esa cerrazón ha producido en ese sector una oscuridad espesa sobre el horizonte a seguir. El resultado es que la élite política está quedando a espaldas del país, atrapada en los hilos de su propia lucha de poder. La propuesta que de hecho éstos han lanzado al país consiste en "la democracia sin pueblo", utilizando la expresión de Maurice Duverger y entendiendo pueblo en el sentido de colectividad. Es decir, mantener la actual estructura de poder pero estrechando al máximo el pluralismo de sectores e intereses irreconciliables entre sí. El criterio de exclusión es el de aquellos sectores que menos poder tengan para hacer valer sus posiciones. Todo ello implica el paso de los partidos políticos del estatus de macroagregadores a microagregadores de demandas. Así una parte importante de los intereses de la población resultan eliminados y el equilibrio político mejor asegurado. En esta línea se pueden leer los conflictos CTV-gobierno durante este quinquenio presidencial, la creciente oleada de represión, el conflicto universitario, la sordera ante las denuncias, etc.

Pero mantener tal sistema significa afinar mucho más los mecanismos de legitimación. Aquí entraría el discurso reformador de las élites políticas. En él se persigue el cambio de las formas y procedimientos pero manteniendo la misma lógica anterior. Tal es el caso por ejemplo de los proyectos de reforma del sistema electoral actualmente discutidos en el Congreso. En ellos se propone la votación nominal para la elección de los miembros a los cuerpos legislativos, pero la designación de los candidatos de las planchas y los métodos de escrutinio siguen manteniendo el peso del partido y su cogollo sobre la decisión del elector. De esta forma se revitalizan las elecciones, que son el mecanismo más importante de legitimación del sistema, pero sin cambiar el fondo del problema.

El otro canal de legitimación lo constituiría la campaña electoral y el carácter carismático de los candidatos. Siempre ha sido éste un procedimiento importante

para vender el sistema y lograr la adhesión de los venezolanos. Pero ahora hay que llevar hasta el extremo sus potencialidades. Para ello hay que sofisticar los métodos publicitarios, las maquinarias electorales, acentuar el carácter mesiánico del candidato, aumentar las movilizaciones, etc. Uno de los elementos que estaría en juego en estas elecciones es precisamente probar la eficacia de todos estos medios para legitimar la democracia sin pueblo que ya empieza a tomar cuerpo entre nosotros.

Una vez que la élite política legitime el poder, tiene las siguientes alternativas para enfrentarse a las demandas de los excluidos del consenso: las tácticas dilatorias, la negativa a oír, la negociación burocrática entre los representantes de los sectores en conflicto anulando la fuerza de los movimientos organizados y si la cosa se pone dura la política del garrote.

## PROYECTO BURGUES-PRIVATIZADOR

Sigamos por la burguesía nacional. Esta clase social ha aumentado su capacidad de imponer sus intereses frente al Estado y al conjunto de la sociedad a través de la apropiación de la renta petrolera (4). Así al aumentar su cuota de poder se ha enfrentado a los otros actores sociales proponiendo un nuevo orden de relaciones entre ellos. Al Estado le ha exigido la retirada de la vida económica. Ha llegado hasta el extremo de pedirle la desestatización de las empresas básicas. Le acusan de intervencionista y despilfarrador de recursos; de gigante asfixiante de las posibilidades del libre mercado, de organización corrupta e ineficiente, etc. La propuesta es el libre juego del mercado, la puesta en práctica de las libertades económicas y la paradójica petición de la acción decidida del Estado a "proteger" el neoliberalismo y la nueva legalidad burguesa. Este proyecto que podríamos calificar de burgués-privatizador se ha propuesto como reforma económica y se ha lanzado a correr camino en los discursos de los candidatos de COPEI y AD (aunque este último lo ha hecho en forma menos estridente), en las primeras presentaciones de la COPRE en materia de reforma económica, a través del GRUPO RORAIMA, de intelectuales que actúan a la manera de profetas del nuevo orden como Arníbal Romero, Fedecámaras, etc.

Pero así como se propone este proyecto al Estado en materia económica, también se le critica en el plano administrativo y estrictamente político de su fun-

ción, a la vez que se le proponen nuevos derroteros. Se le juzga como omnipresente en la vida nacional, de excesivo gigantismo y entramamiento burocrático, se le acusa de presidencialista y centralista y de incapaz de autocontrolarse a sí mismo. Frente a ello la burguesía propone un Estado más manejable y controlable, a la vez que eficiente y eficaz, que no pierda sus recursos en "politiquerías" y en el desarrollo de actividades demagógicas y populacheras. De allí se plantea la necesidad de convertir al Estado en una organización aseptica que se limite a cumplir estrictamente sus funciones.

En esta línea las reformas planteadas son: la descentralización del Estado y en ese horizonte se inscribirá la elección directa de gobernadores, la profesionalización de la gerencia pública, la privatización de importantes servicios públicos, racionalizar y recortar la administración pública, etc.

También la burguesía toma posición frente a los partidos. Los acusa de partidizar todos los espacios de desarrollo de la vida social venezolana, de cogollización y de populistas en el sentido de demagogos. Esta crítica, de la que participan muchos sectores, significa en boca del sector privado eliminar a los partidos como protagonistas autárquicos del sistema político. Hasta el momento este sector ha participado como un socio importante en las decisiones que toman los partidos (fundamentalmente en AD y COPEI), pero como socio al fin y al cabo. El planteamiento es dejar de ser socio para convertirse en interlocutor abierta y directamente. La ventaja de esta gente sobre el resto de los sectores sociales que tienen las mismas pretensiones está en el poder que poseen para lograr ese objetivo.

El medio fundamental para lograr esos fines es la reforma del sistema electoral, por la vía del establecimiento de elecciones uninominales y/o nominales para escoger los candidatos a ocupar los cargos públicos disponibles. ¿Pero cómo? ¿No es ésta una propuesta revolucionaria para el momento que atraviesa el sistema político y la que más consenso ha logrado de toda la población? Sí, es cierta la respuesta implícita en esta pregunta. Lo que sucede es que conviene a la burguesía una profundización de las formalidades democráticas que amplía su capacidad de participación en la lucha política.

En efecto, un sistema electoral que establece realmente la nominalidad y la uninominalidad va en detrimento del poder de los partidos a la vez que estimula y favorece la competencia de los individuos

que tienen aspiraciones políticas. Pues bien, los partidos políticos tendrían que redefinir sus funciones y renunciar definitivamente a su papel de protagonistas del que-hacer político. La burguesía habría ganado una batalla sin disparar un tiro, a la vez que quedarían como los grandes demócratas porque han destinado tiempo y esfuerzo a la lucha en esta dirección. Por otra parte, la reforma electoral así planteada da la posibilidad a esta clase de colocar directamente a sus "muchachos" en la competencia política como también de respaldar económicamente sus opciones y ambas cosas sin el pago de peajes partidistas.

## UN ESPACIO PARA LA CLASE MEDIA

El otro actor social involucrado en la ideología de las reformas es la clase media. Me refiero a ese sector social que ha crecido en estos 30 años de democracia, compuesto de profesionales, técnicos, intelectuales, medianos comerciantes e industriales y que viven en las llamadas zonas residenciales de nuestras principales ciudades. Estos encontraron en el proyecto populista de modernización la posibilidad real de ascenso y progreso en materia económica, social y política. En el campo económico, la clase media se ubicó en las áreas de prestación de importantes servicios públicos y en menor medida al servicio de la gran empresa privada. Algunos prefirieron el camino independiente y se establecieron como pequeños y medianos comerciantes.

En el aspecto social, la clase media ha conseguido una gama amplia de beneficios y se ha presentado a sí misma como el símbolo del éxito en cuanto a movilidad social se refiere. Políticamente, también ha conseguido acumular poder para defender sus intereses. La proliferación de gremios y su respectiva imbricación en los partidos políticos se ha convertido en el arma adecuada para ello.

La crisis del sistema político también ha obligado a este sector a replantearse su posición en él. El lema es defender lo conseguido ante la amenaza de la pauperización y del cierre progresivo de los canales de participación política. La primera forma de defensa ha sido el ataque, que desde el punto de vista ideológico no ha sido muy original en este caso, nutriéndose de los tópicos de los temas de la protesta común. Pero no ha sido así desde el punto de vista político, donde la pelea ha sido a muerte a través de movimientos nacionales o regionales reivindicativos, así como también dentro de los mismos par-

tidos.

Sin embargo, se trata no sólo de defender lo conseguido sino de aumentar la cuota de poder y para ello han lanzado sus propuestas de reformas. El horizonte de éstas es la modernización del sistema político. Es decir, mantener el actual sistema, que tantos beneficios ha rendido, pero eliminando de él las trabas que se han generado por medio de la revitalización de las estructuras del Estado, los partidos y el sistema electoral, siguiendo el parámetro de las democracias occidentales. Lo mismo vale decir para el modelo de crecimiento económico y social, hay que superar los errores del proyecto populista de modernización para hacerlo más cónsono con los nuevos tiempos y circunstancias.

Las propuestas de reformas políticas y económicas presentadas por la COPRE se mueven en esta perspectiva de comprensión. Las reformas políticas inmediatas plantean la profundización de la democracia desde la ampliación de las posibilidades de participación en los partidos políticos, en el sufragio electoral (nominalidad y uninominalidad) y en las instancias gubernamentales más cercanas al elector: gobierno de los Estados y poder municipal (5). El planteamiento es la modernización de las instituciones políticas. Lo mismo pero en el campo económico sucede con los lineamientos generales para una nueva estrategia económica: abrir nuevos cauces a la economía dirigiéndola hacia la actividad exportadora, racionalizar la acción del Estado en los ámbitos de su intervención y garantizar el bienestar social de la población (6). La idea de fondo es la modernización capitalista del desarrollo para ponernos en sintonía con el momento y el mundo en que vivimos.

El discurso de la modernización así entendido conviene fundamentalmente a la clase media porque no cambia el sistema que ha sido tan útil para su crecimiento sino que desarrolla sus virtualidades y potencialidades. Por otra parte, el proceso de modernización supone la cooperación activa de esta clase, dándole un lugar privilegiado en él. Por último, también el proceso en cuestión es una salida a corto plazo para una basta generación que se ha forjado a lo largo de 30 años y que aspira a continuar su promoción económica y política.

## DEMOCRACIA POPULAR

El último actor a analizar es el movimiento popular organizado. Nos referimos a todas las organizaciones civiles au-

tónomas que reivindican los intereses de la clase popular y que han ido paulatinamente conformando un movimiento nacional de expresión y poder. Este actor social es débil en la actualidad, sin embargo es progresivo su avance y fortaleza. A lo largo de estos 30 años mucha gente del pueblo pobre y sencillo ha conseguido el poder de la palabra, pelear como un solo hombre por sus derechos, participar en movimientos regionales de autopromoción, etc. Hoy existen a lo largo de todo el país una variedad de grupos y movimientos de la clase popular que están dando luchas políticas importantes.

Ante la crisis del sistema político, este actor social se ha planteado una redefinición de su posición en él. La primera prioridad es la defensa de la vida. En efecto, hasta el presente el movimiento popular podía crecer en medio de las contradicciones existentes. Pero ahora ha encontrado como respuestas a sus demandas la represión y el atropello. Se está entonces jugando la posibilidad de existir como sujeto, como actor que pueda discutir y denunciar sin ser eliminado, como cuerpo vivo

que pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que el poder público está en la obligación de cumplir con él.

Para ser reconocido y afirmado como sujeto, el movimiento popular debe "desviar" a la democracia de sus posibles derroteros de privatización o de sólo modernización hacia la meta de una mayor popularización de la misma. Un paso hacia esta dirección ha sido apropiarse y defender algunas reformas políticas, principalmente la reforma a la ley orgánica de régimen municipal. La estrategia consiste en encontrar nuevas vías de ampliación del poder local de las organizaciones vecinales de base. Con esta finalidad se ha organizado una lucha de abajo hacia arriba que presiona en la línea de colocar al municipio al servicio de las grandes mayorías de la comunidad. Ello supone la descentralización, la despartidización y la democratización del mismo, para lo cual se hace necesario establecer elecciones uninominales para designar a los representantes del poder local.

El paquete de reformas hacia la popu-

larización todavía no está hecho. Sin embargo se ve como importante diseñar instrumentos legales: que aseguren la integridad física de los individuos ante la creciente ola de represión de los cuerpos de seguridad del Estado, que promuevan el desarrollo autónomo de los sindicatos en defensa de los trabajadores, que promuevan la protección del Estado hacia las experiencias cooperativas populares, etc. En materia económica se ve como indispensable propiciar un modelo de crecimiento basado en la capacidad de consumo de las mayorías, en la intervención cualificada del Estado en pro del bienestar colectivo, asegurar una redistribución del ingreso nacional y desarrollar nuestra capacidad productiva de generar riqueza hacia el mercado interno.

De todo lo dicho se concluyen tres tareas importantes para el movimiento popular:

- Es necesario discernir y filtrar el discurso de las reformas. En un mismo lenguaje se esconde una variada y complicada red de intereses y encarnizada lucha de poder. Por eso no se puede asimilar sin más el tono crítico y de cambio contenido en él.

- No basta con apoyar una reforma determinada, como por ejemplo la reforma a la ley orgánica de régimen municipal, hay que desarrollar un grado de poder tal que permita defenderla y ponerla a disposición de los intereses del movimiento popular.

- Está planteado como necesidad urgente desarrollar el contenido explícito de las reformas para la popularización de la democracia y desarrollar una estrategia que las publicite en el conjunto de la sociedad de manera que se entren a competir en el amplio discurso reformador.

#### NOTAS

- (1) Cfr. BRANDO, Jesús Eduardo: *El Nacional*, pág. D-4, 11-12-87.
- (2) ROCHER, Guy: *Introducción a la sociología general*. Barcelona, edit. Herder, 1980, pág. 475.
- (3) VELASQUEZ, Ramón J.: "Reformas en la Guerra y en la Paz. La gran oportunidad". En: *Revista de Ideas*, año I - N° 1 - Junio 86. págs. 7-20.
- (4) Cfr. ESPINASA y MOMMER: "De una a otra Venezuela". En *SIC*, Año L N° 500. Diciembre 87. págs. 477-481.
- (5) Cfr. SOSA, Arturo: "Reformas políticas al sistema democrático venezolano". En *SIC*, Año L N° 495. Mayo 87. págs. 203-206.
- (6) Cfr. PURROY, Ignacio: "La estrategia económica de la COPRE". En *SIC*, Año LI N° 504. Abril 88.

